

PARA FORZAR A LOS GOBIERNOS A RESPONDER*

por Andrés de Francisco

Por razones no precisamente banales, han venido creciendo la insatisfacción y el descontento con respecto a las democracias contemporáneas, con respecto a su *performance* y a su calidad. Son muchas, en efecto, las vías de fuga de nuestros sistemas de gobierno representativo. A la manipulación desde arriba se le une la desafección y el descreimiento ciudadanos, a la desinformación controlada y el descrédito de la clase política les siguen el “cinismo” y la baja participación de electores y votantes de a pié. Y la brecha entre representantes y representados se abre y se abre. Al poco de que el señor Bush fuera aupado a la presidencia de la superpotencia norteamericana por un escaso margen de votos tantas veces recontados, mostraba John Carlin (2000) en el diario *El País* —como ya lo hiciera antes R. Dworkin (1996) en la *New York Review of Books*, y antes aún J. Rogers y J. Cohen (1983) en *On Democracy*— que la democracia americana es una democracia de y para las clases opulentas y las grandes corporaciones industriales, esto es, de y para aquellos grupos e individuos con capacidad sustantiva de financiar las cada vez más costosas campañas electorales. J. Carlin mostraba también que esta dependencia financiera de los candidatos generaba férreas constricciones en la agenda y acción políticas posteriores; e

* Quiero agradecer a Fernando Aguiar sus múltiples y acertados comentarios críticos a las sucesivas versiones previas de este capítulo, que sin duda contribuyeron a mejorarlo sin que, por supuesto, le quepa responsabilidad alguna sobre el resultado final.

incidía finalmente en lo que todos sabemos: que la canalización de los mensajes a través de la pequeña pantalla vacía hasta tal punto de contenido a los propios mensajes que llega a hacer indistinguibles las distintas ofertas programáticas, más allá de la imagen, siempre fugaz, y la telegenia, de los que ponen cuerpo y cara a lo que no parece ya más que un haz entrelazado de intereses oligárquicos.

Semejante estado de cosas y de conciencia pública no podía dejar de tener eco en la caja de resonancia que es, con todos sus retrasos, la Academia, en la que ha pasado ya a mejor vida la autoindulgencia de la ciencia política de los años sesenta y setenta, que había puesto marchamo científico –hoy casi nos abochornamos al recordarlo– al siguiente sofisma: cuanta menos participación, implicación y compromiso ciudadanos tanto mejor para el funcionamiento del sistema “democrático”. En aquellos años, que fueron años de guerra fría y por tanto de obturación de la libertad de pensamiento, la democracia llegó a concebirse, al menos por el *mainstream* de la ciencia política *estándar* (por los Berelson, los Lazarsfeld y McPhee, por los Huntington y los Riker, entre otros¹) como un sistema intrínsecamente elitista, como una maquinaria para la elección alternante de elites y, en consecuencia, como un sistema cuyo funcionamiento óptimo exigía un nivel ínfimo de perturbación desde abajo a fin de que expertos y elites profesionales diseñaran y ejecutaran *sus* políticas públicas.

Afortunadamente, sin embargo, la ciencia política contemporánea es más exigente y ha abandonado ese hegelianismo de derechas que hace de la necesidad virtud pretendiendo que todo lo real es racional y confundiendo el “es” y el “debe”. Hoy sabemos que el horizonte normativo de la democracia dista mucho de su facticidad; hoy la crítica no es acallada por las justificaciones –ahora más a la defensiva– de la tecnocracia. Y aunque todavía quedan –siempre los habrá– buen número de intelectuales orgánicos venal y acomodaticamente instalados en el *establishment*, el léxico democrático se ha vuelto a enriquecer de forma sorprendente: desarrollo y profundización democráticos; democracia fuerte, participativa, disputatoria, asociativa; calidad de la democracia, rearme de la sociedad civil, etc., son los términos y epítetos que más aparecen en lo que podríamos llamar el resurgimiento de un programa convergente de investigación político-normativo sobre la democracia².

1 Puede encontrarse una revisión crítica y muy documentada de toda esta literatura en Deluca, 1995: caps. 5-7.

2 Buenos ejemplos de ello, cada uno desde su propia perspectiva, son: Barber, 1984; Dahl, 1982 y 1985; Sandel, 1996; Cohen y Rogers, 1995; Putnam, 1993; Bowles y Gintis, 1987; Hirst, 1994; y Elster, 1998.

1. *Accountability* y “responsividad”

Dentro de toda esta literatura que, desde los últimos veinte años, viene reclamando la necesidad de fortalecer nuestras debilitadas democracias, hay dos categorías centrales, las de “*accountability*” y “*responsiveness*”³. El intraducible término de “*responsiveness*” procede de “*responsive*”, adjetivo que, aplicado a un gobierno –o a un régimen–, lo califica como un sistema en el que las medidas políticas –legislativas o ejecutivas– *responden* a la voluntad de la mayoría del demos, a sus necesidades y preferencias *explícitas*. Subrayo lo de “*explícitas*” a) *porque* esas necesidades y preferencias pueden estar implícitas o incluso inhibidas o reprimidas. Éste es un problema serio del concepto de *responsiveness*: la génesis de esa inhibición o represión puede ser el poder político mismo (mediante el uso de técnicas de manipulación y control mediático) o un grado de subdesarrollo del propio proceso democrático en su base (baja participación, inmadurez de la cultura política, etc.). Y subrayo lo de “*explícitas*” b) *pese* al hecho de que las preferencias y necesidades manifiestas pueden juzgarse erróneas, desinformadas o colectivamente contraproducentes. Soy de la opinión de que nadie –y menos una supuesta tecnocracia de expertos– tiene la llave de la verdad sobre el óptimo o los óptimos, siquiera locales, en la arena política. Nadie ha demostrado todavía que las elites y los expertos tengan un acceso más ecuaníme a la información o que no padezcan sesgos estructurales de cognición y procesamiento de esa información o que siquiera puedan reunir toda la información relevante en el momento preciso de tomar sus decisiones. Antes al contrario, en nombre del conocimiento experto se han cometido las mayores barbaridades; en nombre de los “verdaderos” intereses de los gobernados, las elites no han dejado de defender y promover –tantas veces a sangre y fuego– sus privilegios e intereses particulares.

En cualquier caso, la *reponsiveness* recoge –parcialmente– el ideal de soberanía popular, pues qué grado de soberanía tendría un

3 Una buena muestra de por dónde van los tiros en el uso de estos dos conceptos por parte de la ciencia política contemporánea es el libro de Przeworski, Stokes y Manin (1999). Yo, sin embargo, no restrinjo como ellos el concepto de *accountability* a la sanción sobre los resultados de las políticas públicas. Esta es una restricción innecesaria que sólo se explica, en su caso, porque su objetivo es analizar las elecciones en las democracias parlamentarias modernas como posible mecanismo de *accountability* (como mecanismo de “renovación contingente”). Pero, aún así, los electores no tienen por qué sancionar retrospectivamente, mediante su voto, sólo los resultados de las políticas; también pueden juzgar y valorar y sancionar o premiar intenciones y decisiones justificadas, independientemente de que llegaran a buen puerto o fracasaran.

demos si sus demandas y necesidades —explícitas— no obtuvieran la suficiente respuesta y con la suficiente rapidez por parte de sus gobiernos: ¡ninguna!

Por su parte, el mecanismo de la *accountability* responde al principio clásico de la *euthyna* (cfr. de Ste. Croix, 1988:335), de la “rendición de cuentas”, a la que, en la democracia ateniense, debía someterse todo mandatario al final de su mandato. Sea como fuere, se dice que un sistema político —donde unos gobiernan y otros son gobernados— es *accountable* cuando los gobernantes deben rendir cuentas de su gestión y sus decisiones políticas ante los gobernados, es decir, son *controlables* por ellos. Indudablemente, la robustez o la fortaleza de un régimen democrático están necesariamente relacionadas con el grado de control que el soberano esté en condiciones de ejercer sobre sus representantes o sus mandatarios y con la prontitud y eficacia de la respuesta de éstos en la satisfacción de las demandas y necesidades de aquél. *Accountability* y *responsiveness* no son, obviamente, variables nominales (como casado o no casado: conceptos clasificatorios) sino variables ordinales que admiten grados (esto es, conceptos comparativos). Un gobierno es más o menos *accountable*; un régimen es más o menos *responsive*.

De la *accountability* (controlabilidad a partir de ahora) y de la *responsiveness* pueden decirse muchas cosas. Yo me centraré en dos que considero críticas.

1. La primera es que un sistema de toma de decisiones colectivas o de elección pública puede ser controlable y “responsivo”, incluso en grado máximo, sin ser por ello en absoluto democrático. Tres ejemplos bastarán. *Primer ejemplo*: una organización jerárquica con una estructura descendente de mando y autoridad. Pensemos en una burocracia moderna. El funcionario-tipo, pieza de un organigrama de funciones, tiene una serie de competencias definidas y es responsable ante —y controlable (y eventualmente sancionable) por— su inmediato superior. El sistema en su conjunto puede responder eficazmente (ser “responsivo”) a los objetivos y necesidades de la propia burocracia (o del ejecutivo); el funcionario-tipo puede responder eficazmente (ser “responsivo”) a las expectativas de su departamento y su superior jerárquico. El sistema empero *no* es democrático. *Segundo ejemplo*: una oligarquía también puede ser controlable y “responsiva” si su *patriciado* es políticamente activo y controla al gobierno y si éste responde con su política a los intereses colectivos de la minoría en el poder. En la historia de la teoría política Venecia, la serenísima república veneciana, sería el paradigma de este tipo de autogobierno aristocrático u oligárquico. *Tercer ejemplo*: la relación capital-trabajo

en la economía política capitalista es una relación asimétrica de poder donde el empresario pone en marcha diversos mecanismos de control a fin de extraer el máximo de esfuerzo y trabajo del trabajador, esto es, a fin de que éste *responda* a sus expectativas de rendimiento⁴. La relación capital-trabajo de la economía política del capitalismo, huelga decirlo, *no* es democrática.

No es difícil deducir la enseñanza que encierran estos ejemplos, a saber: para que los mecanismos de *accountability* y *responsiveness* caractericen a una democracia han de cumplir al menos dos requisitos: a) que sean los gobernantes los que son controlables por los gobernados: la controlabilidad tiene que ser pues *ascendente*; y b) que el demos incluya a las mayorías no privilegiadas: el sistema tiene que ser pues máximamente *inclusivo*.

2. Lo segundo que puede decirse sobre nuestros dos conceptos es que parecen mantener entre sí una relación medios-fines, una relación instrumental. En efecto, la *accountability* parece ser un medio para *forzar* a los gobiernos a responder. No es una hipótesis insensata decir que, en democracia, cuanto mayor sea la controlabilidad ascendente –hasta un determinado umbral de saturación– mayor será el nivel de respuesta descendente. De acuerdo, pero a la vez esa relación instrumental medios-fines es problemática. ¿Por qué? Sencillamente porque –sobre todo en un gobierno representativo– los llamados a ejercer la *accountability* –los representados, el soberano– no son los mismos agentes que los encargados –representantes, gobernantes– de responder a las demandas y necesidades de aquéllos. En el gobierno representativo moderno, a diferencia de la democracia antigua, los ciudadanos *no gobiernan y son gobernados por turno*⁵. En el gobierno representativo moderno hay dos sujetos bien diferenciados, gobernantes y gobernados, de tal manera que la *accountability* y la *responsiveness* tienen referencias distintas: el gobierno (los gobernantes) ha de responder *ante* los gobernados (el soberano); el soberano, por su parte, ha de controlar *al* gobierno. *Entre unos y otros, obvio es decirlo, hay un potencial conflicto de intereses.*

4 La relación capital trabajo, como hoy ya nadie ignora, es una relación asimétrica basa en un “intercambio disputado”, donde el empresario –o sus empleados en tareas de organización del trabajo– tiene que extraer, mediante mecanismos de control y sanción, esa “propiedad disputada” del trabajo que es su calidad, formalmente no contratable. Cfr. Bowles y Gintis, 1990.

5 Cfr. Aristóteles, *Política*, 1317b.

2. El juego del gobierno frente al soberano

Si partimos del supuesto de que ambas partes son egoístas y racionales, es decir, maximizadoras de utilidad privada, podemos convertirlas en jugadores (*Gobierno* y *Soberano*) de un juego de estrategia en el que los jugadores se enfrentan a los siguientes dilemas. El gobierno, por un lado, se enfrentará al dilema de ser o no ser “responsivo”, teniendo en cuenta que su principal preferencia es la de gobernar libremente, sin cortapisas ni compromisos, haciendo y deshaciendo a su antojo. Por su parte, el soberano tendrá que enfrentarse al dilema de controlar o no controlar, sabiendo que controlar tiene costes de oportunidad, aunque lógicamente también está en su interés que el gobierno satisfaga sus preferencias, esto es, que responda. Representemos las preferencias del modo siguiente: *Gr* y *Girr* para, respectivamente, gobierno “responsivo” y gobierno “irresponsivo”; y *Sa* y *Sp* para, respectivamente, soberano activo (que ejerce controles) y soberano pasivo (que se abstiene de controlar). Los órdenes de preferencias resultantes serán:

1) *Para el gobierno*. Ante todo el gobierno preferirá tener en frente un soberano pasivo que no lo controle y tener así total libertad de movimiento, no viéndose obligado a satisfacer preferencias (*Girr*, *Sp*); en segundo lugar, estará dispuesto a ser “responsivo” si el soberano lo controla, pues teme la sanción de éste (*Gr*, *Sa*); en tercer lugar, preferirá asumir el riesgo de sanción y mantener su libertad aunque sea controlado (ya buscará medios para manipular a la opinión pública), esto es (*Girr*, *Sa*), porque lo que menos quiere es ser incondicionalmente “responsivo”, cuando sabe que no está sometido a control (*Gr*, *Sp*). Así, pues, el gobierno tiene el siguiente orden de preferencias:

$$G = (Girr, Sp) = 4 > (Gr, Sa) = 3 > (Girr, Sa) = 2 > (Gr, Sp)$$

2) *Para el soberano*. Por su parte, el soberano preferirá ante todo un gobierno “responsivo” sin tener la necesidad de controlarlo (*Sp*, *Gr*); a continuación, estará dispuesto a controlar (y a correr con los costes del control) si esto le asegura que el gobierno responderá (*Sa*, *Gr*). En tercer lugar, preferirá un gobierno no “responsivo” y no controlado (*Sp*, *Girr*) porque lo que de ninguna forma quiere que ocurra es que él controle y el gobierno no responda (*Sa*, *Girr*). Por lo tanto, el orden de preferencias del soberano sería:

$$S = (Sp, Gr) = 4 > (Sa, Gr) = 3 > (Sp, Girr) = 2 > (Sa, Girr) = 1.$$

Trasladando estas preferencias a una matriz de pagos obtendríamos lo siguiente:

		S	
		<i>a</i>	<i>p</i>
G	<i>r</i>	(3,3)	(1,4)
	<i>irr</i>	(2,1)	(4,2)

Puede observarse que mientras **G**, el gobierno, no tiene una estrategia dominante en este juego, **S**, el soberano, sí la tiene: haga lo que haga el gobierno, siempre saldrá ganando con la estrategia *p*, la de la pasividad, la de la abstención de ejercer el control. Pero si **S** tiene estrategia dominante, **G**, que la conoce y no es tonto, la incorporará a sus cálculos de costes-beneficios y rápidamente cambiará a *irr*. Así las cosas, la solución del juego es **(Girr, Sp)**: el gobierno gana, el soberano pierde. En resumidas cuentas, en ausencia de control político desde abajo, los gobiernos tenderán a ser “irresponsivos”. Esto es lo que el juego predice.

3. Controlabilidad y diseño constitucional

El modelo anterior es instructivo en varios sentidos: nos dice de la importancia crítica que tiene la controlabilidad ascendente para que podamos siquiera hablar, con un mínimo de seriedad, de democracia: sin controlabilidad el sistema deja de responder y, por tanto, se desentiende del imperativo de soberanía popular. Ahora bien, el modelo también nos avisa de que la controlabilidad del sistema es de por sí precaria dados los órdenes de preferencias establecidos de gobierno y de soberano. Más aún, que –dados sus costes, los de la controlabilidad– el soberano cederá a la pasividad y el sistema se volverá “irresponsivo”. A mi entender, hay dos formas de afrontar este problema. La primera (i) es preguntándose por qué diseño institucional haría posible el cambio de ordenación de preferencias de

sendos gobierno y soberano, es decir, preguntándose por qué sistema de incentivos haría que el soberano quisiera controlar (que ésta fuera su estrategia dominante) y, en consecuencia, que el gobierno no tuviera más remedio que querer responder, que la *responsiveness* fuera su primera necesidad vital. Huelga decir que esto pasa por estimular la *participación política* activa de la ciudadanía. La segunda (ii) es preguntándose si existen mecanismos que hacen que el sistema se controle a sí mismo y lo fuercen a ser suficientemente “responsivo”.

Que la participación ciudadana –en tareas de control o cualesquiera otras– es susceptible de estimulación y, por lo tanto, objeto del diseño institucional es algo que nos muestra la observación histórica y comparada de los sistemas políticos. Sin ir más lejos, la democracia ateniense supo, seguramente como ningún otro régimen de la historia, estimular esa participación ciudadana (la participación *de accountability* y otros tipos de participación política): el *misthos* –desde la reforma de Efilates/Pericles en 461 a.n.e–, el sorteo, la rotación de las magistraturas y la brevedad de los mandatos fueron las cuatro grandes medidas institucionales de que aquella democracia se sirvió, entre otras cosas, para estimular la participación activa de un demos que incluía a los mayoritarios *nullatendendi*⁶.

Pero la segunda estrategia de diseño institucional –la que busca determinados mecanismos de autocontrol constitucional “automático”– es complemento imprescindible de la primera. Con estos mecanismos, la participación activa de la ciudadanía en tareas de control seguirá siendo necesaria; sin ellos, la exigencia política sobre la propia ciudadanía sería ciertamente desorbitada. En un importante capítulo de su estimulante libro, Philip Pettit (1997: cap. 6) analiza un conjunto de mecanismos constitucionales que nos serán útiles aquí, aunque su objetivo y el nuestro sean ligeramente distintos⁷.

6 Cfr. el maravilloso –aunque olvidado– librito de Rosenberg (1984).

7 En efecto, el objetivo de su análisis y propuesta constitucionalista es evitar o minimizar la interferencia arbitraria del gobierno sobre la libertad de la ciudadanía, evitar o hacer muy difícil que el proceso político sea *manipulable* en beneficio de cualesquiera intereses faccionales, evitar o minimizar lo que él denomina *imperium gubernamental* o lo que la teoría política clásica ha denominado siempre *tiranía*. Nuestro objetivo es analizar esos mecanismos como instrumentos de autocontrol automático del proceso político a fin de hacer al sistema más responsivo. Sin embargo, ambas empresas son en gran medida convergentes: cuanto más tiránico es el sistema, habrá también más arbitrariedad o discrecionalidad en la toma de decisiones y menos *garantías* de responsividad del sistema. Sin embargo, también puede haber mecanismos que, evitando el *imperium*, hagan menos responsivo al sistema. Por eso cribaremos el análisis de Pettit.

El primer gran *desideratum* constitucional es que el sistema, en palabras de James Harrington constituya un “imperio de las leyes y no de los hombres” en el doble sentido de que a) las acciones del gobierno deben de tener preferiblemente una base legal y no particularista, y b) las leyes deben de tener una determinada forma (generalidad, aplicabilidad a los propios legisladores, inteligibilidad, consistencia, vocación de permanencia, etc.). El cometido de este principio constitucional es que el gobernante no esté *legibus solutus*, que la ley sea universalmente aplicable y su imperio inescapable⁸. [Apunto como curiosidad marginal que para James Harrington este principio forma el nervio central de la “ancient prudence” y no de la prudencia moderna: otro claro exponente de cómo los modernos, en su enfrentamiento con las monarquías absolutas posrenacentistas, vuelven su mirada a la *civilis sapientia* clásica].

A nadie se le escapa la importancia de que la autoridad del gobierno esté “*legibus restricta*”; pero no hace falta haber leído a Maquiavelo o a Marx para darse cuenta de que esta constricción no es tan exigente como puede parecer: el que nadie esté por encima de la ley, no quiere decir que el sistema legal no tenga sesgos oligárquicos, ni garantiza que la ley y su imperio contemplen por igual todos los intereses, ni garantiza por tanto que el proceso político sea inclusivamente “responsivo”. “Recorred la historia –clama Robespierre en su *Discurso ante la Convención del 10 de mayo de 1793*, no por olvidado menos certero y profundo y brillante–: por doquier veréis a los magistrados oprimir a los ciudadanos y al gobierno *devorar la soberanía*”⁹. Y eso, recorriendo la historia, se ha demostrado perfectamente compatible con la “ley”. Sigue Robespierre: “Hasta aquí el arte de gobernar no ha sido más que el arte de despojar y de sojuzgar al gran número en beneficio del pequeño número, y *la legislación el medio de convertir sus atentados en sistema*” (cursiva mía). Y es que hasta aquí –podemos decir hasta hoy– “la ambición, la fuerza y la perfidia han sido los legisladores del mundo” (ibid.). Cuando se impone el poder de los pocos, como ha sido el caso en la mayor parte de la historia, no debemos olvidar que “las pasiones del hombre poderoso tienden a elevarse por encima de las leyes justas o a crear leyes tiránicas” (ibid.). Que impere pues la ley, pero ante todo que las leyes sean justas y no medios de devorar la soberanía ni de

8 Cfr. el rastreo de esta idea en el pensamiento republicano por parte de Viroli, 1990: cap. 7.

9 *Discours prononcé devant la Convention le 10 mai 1793*, “Sur la Constitution à donner à la France” <http://membres.lycos.fr/discours/constitution.htm> (cursiva mía).

convertir en legalidad el despotismo de unos pocos ni de convertir a la ambición, la fuerza y la perfidia en legisladores del mundo. Para ello, el arte de gobernar y los gobiernos deben cumplir un segundo *desideratum*.

4. División y equilibrio de poderes

Este segundo gran *desideratum* constitucional es, en palabras de Pettit, una *condición de dispersión o no acumulabilidad del poder*. El pensamiento republicano-democrático siempre ha sido temeroso de la concentración del poder, del exceso de poder. El poder, lo sabemos desde Platón, tanto más por su promiscua relación con los circuitos de la riqueza, es un factor de corrupción de primer orden: “La corrupción de los gobiernos –cito nuevamente a Robespierre– tiene su origen en el *exceso de su poder* y en su *independencia del soberano*. Remediad ese *doble abuso*. Comenzad por moderar el poder de los magistrados” (ibid, cursivas mías). En este principio de dispersión del poder se dan cita y convergen dos de las grandes líneas del pensamiento republicano clásico: la doctrina de la *división* de poderes y la doctrina del *equilibrio* de poderes (es decir de los *checks and balances* o frenos y contrapesos).

Sobre la división de poderes conviene precisar varias cosas. En primer lugar, que nunca se insistirá lo suficientemente en ella. Es de hecho una de las principales armas del soberano para limitar el poder de los gobernantes e impedir la corrupción de los gobiernos. Por ello, en segundo lugar, conviene diferenciar entre dos tipos de división de poderes: la *sincrónica* y la *diacrónica*. La tradicional división entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial responde a la primera modalidad –sincrónica– de la división de poderes. Y es fundamental. Pero no lo son menos otras divisiones sincrónicas. Por ejemplo: 1) que ningún magistrado pueda ejercer al mismo tiempo varias magistraturas (“más vale multiplicar los funcionarios públicos que confiar a algunos de ellos una autoridad demasiado temible” –ibid.–), 2) “Que las diversas ramas del ejecutivo sean ellas mismas distinguidas lo más posible, según la naturaleza misma de los asuntos, y confiadas a manos diferentes” (ibid.). Ahora bien, las divisiones *diacrónicas* de poder son tan fundamentales como las sincrónicas y, a mi saber, más eficaces e incisivas. El pensamiento republicano-democrático ha insistido, sobre todo, en dos:

1. la brevedad de mandatos, y
2. la “no-reelegibilidad” de los mandatarios¹⁰.

Desde la práctica de la democracia ateniense, hasta las propuestas de Harrington, los antifederalistas americanos, Jefferson, Robespierre o Marx, el pensamiento de la izquierda republicano-democrática ha considerado los dos anteriores puntos como sendas señas de identidad de su concepción de la división de poderes. Robespierre dedica a la cuestión de la reelección su discurso ante la Asamblea Nacional del 16 de mayo de 1791. El núcleo de su argumentación es el siguiente: si no impedimos que los legisladores –los delegados de la Asamblea representativa– perpetúen su poder, rápidamente los más hábiles de entre ellos, los mejores oradores, en colaboración con la intriga y la ambición, se apoderarán de la Asamblea y después de la nación entera: “Así una nación de veinticinco millones de hombres será gobernada por la Asamblea representativa, ésta por un pequeño número de diestros oradores, y ¿por quién terminarán siendo gobernados esos oradores alguna vez?... No oso decirlo, pero fácilmente podréis adivinarlo vosotros”¹¹. Por el contrario, mediante un mandato breve y no reelegible, nos garantizamos que sólo una suerte de ambición, la sana ambición de la gloria derivada de “servir a su país y a la humanidad, de merecer la estima y el amor de los ciudadanos a cuyo seno están seguros de volver al final de su misión” (ibid, nota 11), sea la ambición reinante entre los gobernantes. Sólo así queda asegurada la libertad pública y la propia representación política. Sigue Robespierre sobre los representantes electos pero no reelegibles:

“Dos años de trabajo tan brillantes como útiles en semejante teatro bastan a su gloria. Si la gloria, si la felicidad de ver sus nombres puestos entre los de los benefactores de la patria no les basta, están corrompidos, y son cuando menos peligrosos; hemos de guardarnos bien de ponerles los medios de saciar algún otro género de ambición.

Desconfiaría de aquéllos que, durante cuatro años, permanecieran expuestos a las caricias, a las seducciones reales, a la seducción de su propio poder, en fin, a todas las tentaciones del orgullo o del deseo. Los que me representan, aquéllos

10 Que, como decía antes, son también mecanismos que estimulan la participación ciudadana.

11 *Discours sur la réélection des Membres de l'Assemblée Nationale*, prononcé devant l'Assemblée Nationale le 16 mai 1791. Cfr. <http://membres.lycos.fr/discours/nonreeleibilibite.htm>, pág. 2.

cuya voluntad es siempre la mía, deben estar lo bastante cerca de mí, lo bastante identificados conmigo; si no, la ley, lejos de ser la voluntad general, no será más que la expresión de los caprichos o los intereses particulares de algunos ambiciosos; los representantes, ligados contra el pueblo, con el ministerio y la Corte, se convertirán en soberanos y pronto en opresores” (ibid., nota 11, pp. 3-4).

La tercera cosa que es preciso decir de la división de poderes es que no empece a la democratización de esos mismos poderes. La institución del jurado es una forma de democratizar la administración de justicia; un parlamento fuerte y activo, como quería Max Weber, que controla mediante comisiones de investigación y seguimiento a la burocracia, es una forma de democratizar el ejecutivo (cfr. Weber, 1991:155 y ss.); un parlamento abierto a la ciudadanía, con derechos de petición garantizados y con representantes cercanos a, y controlables por, sus representados, es una forma de democratizar el legislativo. La misma rotación (no reelegibilidad) de los mandatarios, la brevedad de sus mandatos, son formas de democratizar —dividiéndola diacrónicamente— a la Cámara de representantes¹².

Por su parte, la doctrina de los *checks and balances*, de los frenos y contrapesos, del *equilibrio* de poderes está inspirada —en la tradición republicana— por el mismo principio antitiránico. Un poder sin frenos ni contrapesos tenderá a crecer hasta alcanzar una peligrosa y

12 En realidad, a fuerza de dividir o dispersar diacrónicamente el poder de los gobernantes (magistrados, representantes, mandatarios, eso da igual ahora), la rotación de los cargos públicos y la brevedad de los mandatos son mecanismos —por cierto, harto eficaces— de democratización política: no sólo del gobierno representativo (electivo), también de las democracias que, como la antigua, hacían un uso masivo del sorteo como mecanismo de selección de las magistraturas. La no-reelegibilidad (rotación) y la brevedad de mandatos son medidas básicas de higiene democrática para cualquier organización política —no sólo el Estado—, que desgraciadamente han caído en desuso. Por ejemplo, pensemos en un partido político de los llamados de masas. Los partidos políticos contemporáneos —cualquier observador imparcial así lo reconocerá— responden a una organización interna de claro formato clientelar que aúpa a toda suerte y condición —por decirlo con Juan de Mairena— de “cucañistas y trepadores” sostenidos por el patronazgo de las elites partidarias con fuertes tendencias a la patrimonialización del poder interno. Pues bien, valdría con que se introdujera la rotación obligatoria (no digamos ya el sorteo) para ver cómo las elites internas —que se sostienen durante años y años en las cúpulas del poder— pierden toda posibilidad de autopropetuaación oligárquica mediante el patronazgo y la intriga. Para una propuesta de democratización interna de los partidos políticos, cfr. de Francisco, 2001.

temible hipertrofia. Ahora bien, el problema es que estos mecanismos pueden tener sesgos contramayoritarios o elitistas o pueden tener sesgos contraelitistas y populistas. Nadie puede negar la necesidad de introducir frenos y contrapesos en la constitución estatal; el problema es qué equilibrios de poderes pretendemos conseguir con ellos. Porque si analizamos los tres mecanismos básicos propuestos por los padres del constitucionalismo republicano moderno (veto presidencial, bicameralismo y control judicial de las leyes) el sesgo elitista contramayoritario resulta evidente. En el *Federalist*, 74 Hamilton justifica el veto presidencial como *escudo protector* del ejecutivo; así como Madison (*Federalist*, 63) defiende la necesidad de una Cámara Alta –Senado– como mecanismo de autodefensa del propio pueblo “*contra sus propios errores y engaños transitorios*”. El equilibrio de poderes tiene pues en los *founders* un objetivo claro, frenar a las mayorías y a sus representantes en la asamblea popular, y defender así a las amenazadas minorías de la riqueza y la cuna, a los “selected few” hamiltonianos¹³.

En rigor, el bicameralismo es un anacronismo histórico. Históricamente, que es como hay que entender las instituciones políticas, tuvo dos funciones: bien permitir la representación separada y privilegiada de la nobleza hereditaria, bien defender los intereses de las minorías hacendadas, bien ambas. La rama conservadora del pensamiento *whig*, desde el conde de Shaftesbury hasta John Adams, lo defendió como herencia de la antigua constitución *gótica*, continuada a su vez en el sistema parlamentario inglés que sale de la *Gloriosa* en 1688. Y si la antigua constitución *gótica* es reclamada durante el siglo XVIII por el *country party*, por su ala derecha, es porque la llamada “revolución financiera” de 1700 había alzaprimado hasta tal punto la prerrogativa real y la burocracia estatal, que el parlamento se había terminado convirtiendo en un apéndice venal del ejecutivo (cfr. Pocock, 1975). Frente a esta nueva forma de despotismo clientelar (asociado a los *standing armies* y a la moderna hacienda pública), el *whiggismo* conservador añoraba la vieja y “equilibrada” constitución feudo-estamental. Pero muy distinta es la relación que el pensamiento *whig* disidente –desde Sydney y Trenchard hasta Jefferson– mantienen con la herencia *gótica*. Para esta línea de pensamiento político, la traición a la libertad antigua no empieza con la corrupción del parlamento por parte del ejecutivo y la burocracia cortesana de finales

13 Para un análisis más detallado de la naturaleza elitista y contramayoritaria de este argumentario *federalista*, cfr. de Francisco, 2002.

del XVII y del siglo XVIII, sino con la misma constitución gótica. Jefferson, que en esto se deja guiar por el relato de Tácito en su *Germania* de los bárbaros del norte, es meridianamente claro: la auténtica libertad pertenece al sistema sajón, que es un sistema electivo y “unicameral” de pequeños propietarios independientes; y esa libertad habría sido pervertida ya por el yugo feudal que supone la conquista normanda en el siglo XI¹⁴. Y si Jefferson no muestra una oposición al bicameralismo propuesto por los constituyentes americanos es, sencillamente, porque en la joven América no hay una aristocracia hereditaria, como en Europa, y puede así interpretar el bicameralismo no en clave “gótica” sino como instancia de la doctrina de la división de poderes¹⁵. Ingenua e innecesaria concesión ésta, a mi entender, que no quita sin embargo para que el mismo Jefferson defendiera el unicameralismo para la primera constitución revolucionaria francesa que se aprobaría en 1791¹⁶.

Sea como fuere, es lo cierto que el pensamiento democrático está, desde el punto de vista histórico (desde la gran democracia atica), indisolublemente ligado al unicameralismo. El gran jurista Luis Jiménez de Assúa, principal redactor del anteproyecto de Constitución de la II República española, expresaba así —el 17 de agosto de 1931— sus razones contra el bicameralismo:

“Hay, evidentemente, una decadencia del sistema bicameral y nosotros hemos observado que cuando los pueblos realizaron grandes llamamientos populares, no hicieron más que una Cámara. Así ocurrió, por ejemplo, en Francia en 1791 y en 1848; así ocurrió en España en las Cortes de Cádiz contra el parecer de Inganzo, que bien combatió Toreno. Establecemos, pues, por ser altamente democrática nuestra Constitución, una sola Cámara. El sistema bicameral es soberanamente nocivo”¹⁷.

14 Para la importancia del “mito” sajón en el pensamiento de la izquierda *whig* en general y de Jefferson en particular, cfr. el espléndido trabajo de Merrill D. Peterson (1970:57 y ss.).

15 Cfr. al respecto el delicioso trabajo de Merrill D. Peterson, (1976:52).

16 En su *Autobiografía* cuenta Jefferson cómo, a principios de agosto de 1789, tuvo lugar en su propia casa parisina una reunión con ocho líderes del partido *patriota* —Lafayette, Duport, Barnave, Alexander Lameth, Blacon, Mounier, Maubourg y Dagout— en la que, tras horas de deliberación, se decidió (¡además del veto suspensivo del rey!) “que la legislatura estuviera compuesta de un único cuerpo solamente, y que fuera elegida por el pueblo. Este Concordato —anota Jefferson— decidió el destino de la Constitución” (en: Peterson, 1984:96).

17 Discurso de Luis Jiménez de Assúa, pronunciado el 17 de agosto de 1931 ante

Claro que Madison –y otros defensores del bicameralismo– podría reconocer esta asociación histórica entre democracia y unicameralismo y, precisamente por ello, seguir reclamando el equilibrio bicameral del poder legislativo para evitar la “tiranía de las mayorías” de una única Cámara reá de los dictados de sus *bajas* pasiones. El recurso a la historia apenas convencería al pensamiento republicano con inclinaciones contramayoritarias; podría incluso reforzarlo. Por ello es preciso argumentar en su propio terreno y decir que el bicameralismo ni siquiera es imprescindible para conseguir *frenar y contrapesar* al legislativo y lograr que sus decisiones –sus leyes– sean lo más serenas y razonables posible. La desmemoria presente sobre estos temas no debe impedirnos recordar que la historia moderna del pensamiento político –desde Milton a Thomas Paine, desde Nedham a Robespierre– está llena de buenas razones¹⁸ en favor de una única cámara de representantes –de un legislativo unicameral– que sin embargo fuera capaz de serenidad de juicio y evitar su principal peligro, en palabras de Paine, “that of acting with too quick an impulse” (Paine, 1972:201). Un legislativo unicameral podría tener sus propios frenos y contrapesos *endógenos*: el mismo Paine propuso dividir esa cámara, por sorteo, en dos o tres partes y que cada propuesta legislativa fuera debatida secuencialmente en cada una de las secciones antes de votarla en asamblea general. Por supuesto, no se olvidaba Paine de añadir a este fraccionamiento un mecanismo aún más importante, el de “mantener la representación en un estado de constante renovación” (ibid). Sin embargo, la crítica más profunda, por lo que yo sé, de la justificación de una cámara alta que contrapesara o frenara a la cámara baja es la que desarrolla Robespierre en el ya citado Discurso ante la Convención del 10 de mayo de 1793. Es una crítica tanto más profunda cuanto que ataca el principio mismo del equilibrio de poderes. Robespierre sólo dis-

las Cortes Constituyentes de la II República española. Citado por Domènech, 2003.

- 18 No olvidemos que, a fecha de hoy, hay 115 sistemas unicamerales en el mundo (frente a 64 bicamerales), entre los que se encuentran los parlamentos de Dinamarca, Suecia, Noruega o Portugal, y las jurisdicciones subnacionales de Nebraska, Québec y Queensland. El debate sobre los pros y contras de sendos sistemas legislativos, unicameral y bicameral, sigue abierto. Aparte de la mayor eficiencia legislativa y el menor coste económico del sistema, los defensores contemporáneos del unicameralismo no se olvidan de aducir el incremento de la “accountability” y la “responsiveness” que trae consigo. El lector podrá ver volcado sobre el caso “Minnesota”, legislatura que lleva intentando una transición por ahora sin éxito al unicameralismo, esa batería de argumentos a favor y en contra. Cfr. www.leg.state.mn.us/lrl/issues/uni.asp para dicho debate.

para contra un objetivo: la tiranía, el despotismo; y era demasiado sagaz como para ignorar que un gobierno despótico puede tener dos cámaras en perfecto equilibrio (de interés y privilegio):

“¿qué nos importan –clama a la Convención– las combinaciones que equilibran la autoridad de los tiranos? Es la tiranía la que hay que extirpar: no es en las querellas de sus amos donde el pueblo debe buscar la ventaja de respirar algunos instantes, es en su propia fuerza donde hay que situar la garantía de sus derechos” (Robespierre, 1793).

Pero el sesgo elitista y oligárquico de la doctrina constitucional moderna de los frenos y contrapesos llega a su cenit con la revisión judicial de constitucionalidad por parte de una Corte Suprema. Como es sabido este mecanismo no fue previsto por los *Padres Fundadores* sino que fue catapultado tras el caso “Marbury vs. Madison” en 1803. Al respecto, me limitaré a transcribir lo que el último Jefferson escribió a William C. Jarvis el 28 de septiembre de 1820 (en: Billington et al., 1950:16):

“Usted parece... considerar a los jueces como los árbitros últimos de todas las cuestiones constitucionales; una doctrina en verdad muy peligrosa, y una doctrina que nos colocaría bajo el *despotismo de una oligarquía*. Nuestros jueces son tan honrados como los demás hombres, y no más. Tienen, como cualesquiera otros, las mismas pasiones partidarias, por el poder y el privilegio de su cuerpo. Su máxima es ‘boni judicis est ampliare jurisdictionem’, y su poder tanto más peligroso cuanto que ocupan el cargo de por vida, y no son responsables, como otros funcionarios lo son, *ante el control electivo*” (cursiva mía).

El texto no necesita comentarios. Y nuevamente la historia es elocuente. Y lo es, tanto más, si acudimos a los orígenes del problema, esto es, a las primeras décadas posteriores a la Revolución americana. Tras la Constitución de 1787, los hamiltonianos tienen el poder legislativo y el poder ejecutivo, y el mismo Hamilton, como Secretario del Tesoro con Washington en la presidencia, construye, con genio indudable, el edificio financiero-fiscal conscientemente diseñado para defender e impulsar los *moneyed-interests* de los *stock-jobbers*, y de los grandes industriales y comerciantes del norte de la Unión (Beard, 1943, cap. IV). En ese momento, el poder judicial, y su independencia, son irrelevantes. La cosa empieza a cambiar con la presidencia de John Adams, un conservador que comparte

con Jefferson la sensibilidad por los *landed-interests* de pequeños y grandes granjeros del sur y el oeste del joven país, endeudados tras la guerra de la independencia. Pero cuando el propio Jefferson llega al poder presidencial en 1800, los neofederalistas y neohamiltonianos se encuentran con que han perdido los dos grandes poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Pues bien, desde entonces, y durante el primer tercio del siglo XIX, su estrategia de ligar los intereses de la propiedad, de la nueva propiedad capitalista, a los del Estado, se apoyará fundamentalmente en el poder judicial. Es así como el Juez Marshall emerge como el gran campeón de los privilegiados “selected few” convirtiendo a la Corte Suprema en una fortaleza contra todo cambio constitucional prodemocrático¹⁹. Cuando las masas se congregan ante el Capitolio para dar la bienvenida al nuevo presidente demócrata, el general Jackson, en 1829, el juez Story, íntimo amigo del pugnaz *Justice* Marshall y principal discípulo suyo en el alto Tribunal, exclamará, con descarnada conciencia de clase y con asombrosa eficacia republicano-elitista: “El reino del Rey ‘Chusma’ parecía triunfante” (“The reign of King ‘Mob’ seemed triumphant”, en: Schlesinger, 1945:14).

Sobra todo comentario excepto tal vez el siguiente: la historia se ha repetido muchas veces en la misma dirección, desde la oposición ultraconservadora de la corte Suprema a las reformas del “New Deal” roosveltianas, hasta las lealtades fascistas de tantos jueces durante antiguas y recientes dictaduras, en Iberoamérica y en la vieja Europa, y aun durante sus respectivas “transiciones pactadas” a sistemas parlamentarios, y aun después...²⁰. Todo ello indica que las sospechas de Jefferson frente a la supuesta *neutralidad* del “independiente” poder judicial no eran sospechas infundadas²¹.

19 Cfr. el excelente libro de Arthur M. Schlesinger, Jr. (1945:11-25).

20 Actualmente, cuando esto repaso, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está librando una dura batalla con el poder judicial, pues su proyecto de reforma de la seguridad social supone una drástica reducción de los privilegios (no sólo, pero también y sobre todo) de los magistrados, de largo los funcionarios mejor pagados de Brasil. El recientemente estrenado presidente del Supremo Tribunal Federal de Justicia brasileño, Mauricio Correa, declaraba lo siguiente: “La magistratura puede estar tranquila porque ella no está sola ni desamparada”. Y su antecesor en el cargo, Marco Aurelio, se despedía diciendo que la seguridad social en Brasil sólo podría cambiarse “con una revolución”. Pocas veces podrá verse más claramente con cuanto *esprit de corps* puede llegar a actuar el poder judicial, que “ni está solo ni desamparado”, en la defensa de sus privilegios y de los de sus aliados. Cfr. Juan Arias, “El poder judicial de Brasil se resiste a las reformas de Lula”, *El PAÍS*, 24/VI/2003.

21 Sobre el militante y abundante conservadurismo del que es capaz el poder ju-

Jefferson vio el problema con claridad y agudeza: si el poder judicial —en tareas de revisión constitucional de las leyes— es, más que ninguna otra cosa, una garantía de “estabilidad” constitucional *cuando* las constituciones protegen los intereses de la minorías adineradas y privilegiadas o, a la inversa, una fortaleza frente a los cambios constitucionales “populistas” (y la historia parece corroborar este juicio antecedente), entonces la única solución política realista es devolver al *demos*, de tiempo en tiempo, el propio poder constituyente dándole la posibilidad de elegir periódicamente la ley fundamental bajo la que quiere vivir. Semejante propuesta de *devolución periódica de soberanía* está sin embargo en las antípodas del tercer *desideratum* constitucional que analiza Pettit, en el ya citado capítulo de su *Republicanism*, a saber: *la condición contra-mayoritaria*, según la cual “las enmiendas a las leyes más básicas e importantes deberían atravesar un camino particularmente difícil” (Pettit, 1997:181). Esta condición tiene bondad, huelga decirlo, pues parece *en principio* bueno que las leyes, las primarias y las secundarias, sean leyes estables. Pero al afirmarla en ese plano tan abstracto y ahistórico, parece claro que Pettit ignora el problema *político* dinámico que subyace al constitucionalismo moderno y a la doctrina de la división de poderes. Es el problema, justamente, que Jefferson pone encima de la mesa, y Jefferson no era desde luego ningún neófito en cuestiones de derecho constitucional.

Thomas Jefferson, en efecto, redacta la Declaración de Independencia americana y el borrador de Constitución para Virginia en 1776; Jefferson, gobernador de su Estado natal y tercer presidente de los EEUU, urge a los constituyentes en 1787 a que incluyeran un “bill of rights” en la Carta Magna; ese mismo Jefferson se rebela contra las leyes de extranjería y sedición (*Alien and Sedition laws*) promulgadas bajo la presidencia de John Adams para silenciar a la oposición y consigue que fueran declaradas anticonstitucionales en la legislatura de Kentucky en 1798. Pues bien, ese Jefferson ilustrado que cree en los derechos naturales del hombre, ese Jefferson constitucionalista, está sin embargo en contra de toda sacralización de la ley fundamental del Estado. Y ello, bien pensado, en nombre del mismo principio de división *diacrónica* del poder, en este caso, del poder soberano de las generaciones históricas. Oigámosle:

“...ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua, o ni siquiera una ley perpetua. La tierra pertenece siempre

dicial puede consultarse con provecho el lúcido artículo de Roberto Gargarella, “Jueces rigurosamente vigilados”, EL PAÍS, 23/1/2003.

a la generación viviente... Toda constitución, pues, y toda ley, expira naturalmente a los 19 años²². Si se mantiene más tiempo, es un acto de fuerza y no de derecho” (Carta a James Madison, París, 6 de septiembre de 1789, en: Petterson, 1984:963).

Y la razón de esta conclusión (Commanger, 1943) es para Jefferson así de sencilla:

“Cada generación es tan independiente de la precedente, como ésta lo fue de la anterior. Tiene, pues, como ellas, un derecho a elegir por sí misma la forma de gobierno que cree que mejor promueve su propia felicidad” (Carta a Samuel Kercheval, Monticello, 12 de julio de 1816, en: Petterson, 1984:1402).

La idea de Jefferson es todo menos descabellada: las constituciones, como cualquier otro producto de las decisiones humanas no son creaciones *ex tempore* sino reflejo de circunstancias concretas, de necesidades y oportunidades históricas, son soluciones a conflictos y relaciones sociales que tienen fecha. Si las sacralizamos, si las sometemos a una estricta cláusula contramayoritaria que las blinde del cambio —y de la soberanía popular—, entonces ponemos en manos de un poder judicial con “*pasiones partidarias, por el poder y el privilegio de su cuerpo*” y sin responsabilidad electiva, nada menos que la tutela de los derechos de la ciudadanía y la forma del Estado. Insisto: ¿Por qué sacralizar las constituciones? ¿Cuántas situaciones políticas enquistadas podrían solucionarse o aligerarse o reconducirse si las constituciones tuvieran que someterse periódicamente a un gran debate y revisión popular? ¿Cuánto más controlable (y “responsivo”) no sería el proceso político? ¿Cuánto menos “oligárquica” no sería la revisión judicial de las leyes?...

Concluyendo: dos de las graves deficiencias constitucionales del moderno gobierno representativo son a) que los poderes han sido insuficientemente divididos. El pensamiento republicano-democrático ha hecho de esa división —sobre todo, de la división *diacrónica*— una de sus señas de identidad. La otra deficiencia es b) que los poderes han quedado frenados y contrapesados en equilibrios con claros sesgos oligárquicos. La sensibilidad democrática, la que pone el foco en la “responsividad” del sistema, recomienda equilibrios distintos.

22 Según las tablas de mortalidad de la época.

Pero esos nuevos equilibrios requerirían de una profundización del principio de dispersión (o división) del poder así como de una honda democratización (controlabilidad) de dichos poderes. De lo contrario, los gobiernos seguirán *devorando a la soberanía*.

El soberano puede equivocarse, pero como decía el propio Jefferson al final ya de sus días:

“No sé de ningún otro depositario fiable de los poderes últimos de la sociedad *que el mismo pueblo*; y si consideramos que *no es lo bastante ilustrado* como para ejercer su control con absoluta discreción, *el remedio no está en quitárselo, sino en informar su discreción mediante la educación*” (Jefferson a William T. Barry, 2 de Julio de 1822, en: Billington et al., 1950:169).

Referencias bibliográficas

- ARISTÓTELES (1997) *Política*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- BARBER, B. (1984) *Strong Democracy*. University of California Press, Berkeley.
- BEARD, Ch. A. (1943) *Economic Origins of Jeffersonian Democracy*. The Free Press, Nueva York.
- BILLINGTON, R.A.; LOEWENBERG, B. J. y BROCKUNIER, S. H. [comps.] (1950) *The making of American Democracy*. Rinehart and Company, Nueva York.
- BOCK, G.; SKINNER, Q. y VIROLI, M. [comps.] (1993) *Machiavelli and Republicanism*. Cambridge University Press, Cambridge.
- BOWLES, S. y GINTIS, H. (1987) *Democracy & Capitalism*. Basic Books.
- BOWLES, S. y GINTIS, H. (1990) “Contested Exchange: New Micro-foundations for the Political Economy of Capitalism”, en: *Politics and Society*, vol. 18, núm. 2.
- CARLIN, J. (2000) “La democracia de los ricos”, en: *El País*, domingo, 5/XI/2000.
- COHEN, J. y ROGERS, J. (1995) *Associations and Democracy*. E.O. Wright, comp., Verso, Londres.

- COMMANGER, H. S. (1943) *Majority Rule and Minority Rights*. Nueva York.
- DAHL, R. (1982) *Dilemmas of Pluralist Democracy*. Yale University Press, N. H.
- DAHL, R. (1985) *A Preface to Economic Democracy*. University of California Press, Berkeley.
- DE FRANCISCO, A. (2001) “¿Democracia de los partidos? Sí, pero en serio”, en: *El País*, 11/VII/2001.
- DE FRANCISCO, A. (2002) “Democracia, ley y virtud”, en: *Claves de Razón Práctica*, 124, pp 40-47.
- DELUCA, T. (1995) *The Two Faces of Political Apathy*. Temple University Press, Philadelphia.
- DE STE. CROIX, G.E.M. (1988) *La lucha de clases en el mundo griego antiguo*. Crítica, Barcelona.
- DOMÈNECH, A. (2003) *El eclipse de la fraternidad*. Crítica, Barcelona.
- DWORKIN, R. (1996) “The Curse of American Politics”, en: *The New York Review of Books*, 17 de octubre.
- ELSTER, J. [comp.] (1998) *Deliberative Democracy*. Cambridge University Press, Cambridge.
- GARGARELLA, R. (2003) “Jueces rigurosamente vigilados”, en: *El País*, 23/I/2003.
- HIRST, P. (1994) *Associative Democracy*. The University of Massachusetts Press, Amherst.
- PAINE, Th. (1972) *Rights of Man*. Penguin, Londres [2ª ed. 1984].
- PETERSON, M. D. (1970) *Thomas Jefferson and the New Nation*. Oxford University Press, Nueva York.
- PETERSON, M. D. (1976) *Adams and Jefferson. A Revolutionary Dialogue*. Oxford University Press, Oxford.
- PETERSON, M. D. [ed.] (1984) *Jefferson Writings*. The Library of America, Nueva York.
- PETTIT, P. (1997) *Republicanism*. Clarendon Press, Oxford.
- POCOCK, J. G. A (1975) *The Machiavellian Moment*, Princeton, Princeton University Press, Princeton, NJ.

- PRZEWORSKI, A.; STOKES, S. C. y MANIN, B. [comps.] (1999) *Democracy, Accountability, and Representation*. Cambridge University Press, Cambridge.
- PUTNAM, R. (1993) *Making Democracy Work*. Princeton University Press, Princeton, N. J.
- ROBESPIERRE, M. (1791) *Discours sur la réélection des Membres de l'Assemblée Nationale*, prononcé devant l'Assemblée Nationale le 16 mai 1791. Cfr. <http://membres.lycos.fr/discours/nonreeleibibilite.htm>, pág. 2.
- ROBESPIERRE, M. (1793) “Sur la Constitution à donner à la France” en: *Discours prononcé devant la Convention le 10 mai 1793*, <http://membres.lycos.fr/discours/constitution.htm>.
- ROGERS J. y COHEN, J. (1983) *On Democracy*. Penguin Books, Nueva York.
- ROSENBERG, A. (1984) *Democrazia e lotta di classe nell'antichità*. Sellerio editore, Palermo.
- SANDEL, M. (1996) *Democracy's Discontent*. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- SCHLESSINGER, A. M. Jr. (1945) *The Age of Jackson*. A Mentor Book, Boston, Mass.
- VIROLI, M. (1993) “Machiavelli and the republican idea of politics”, en: G. Bock, Q. Skinner y M. Viroli [comps.], *Machiavelli and Republicanism*. Cambridge University Press. Cambridge, Cap. 7.
- WEBER, M. (1991) *Escritos Políticos*. Ed. de J. Abellán, Alianza, Madrid.